



Asamblea General

Distr. general
19 de julio de 2021
Español
Original: inglés

Septuagésimo sexto período de sesiones

Tema 27 a) del programa provisional*

Desarrollo social

Aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y del vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

Informe del Secretario General

Resumen

En este informe, presentado de conformidad con la resolución [75/151](#) de la Asamblea General, el Secretario General subraya la necesidad de fortalecer la acción nacional y la cooperación regional e internacional para el desarrollo social, haciendo hincapié en cómo aumentar considerablemente o utilizar de manera más eficiente los recursos dedicados al desarrollo social a fin de lograr los objetivos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, teniendo en cuenta los múltiples efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y sus consecuencias, especialmente en el desarrollo social. Examina las repercusiones de la crisis de la COVID-19 en el desarrollo social y subraya la importancia de desarrollar políticas sociales a largo plazo para mejorar las capacidades y la resiliencia de las personas ante futuras crisis, y de preservar el gasto social para apoyar dichas políticas y estrategias nacionales, de modo que los países puedan recuperarse mejor y volver a la senda de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Secretario General presenta además los resultados del 59º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social y concluye presentando una serie de recomendaciones en materia de políticas para que la Asamblea las examine.

* [A/76/150](#).



I. Introducción

1. En reconocimiento de la importancia del desarrollo social y el bienestar humano para todas las personas, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social se forjó un consenso histórico para centrar nuestra respuesta sobre desarrollo en las personas. Los Estados Miembros se comprometieron a erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y productivo y fomentar la integración/inclusión social para lograr sociedades estables, seguras y justas para todos, lo cual sigue siendo pertinente hoy en día, cuando los países se enfrentan a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19.

2. Para conmemorar el 25º aniversario de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Asamblea General convocó una reunión de alto nivel conjuntamente con el Consejo Económico y Social en diciembre de 2020. Durante la reunión, los Estados Miembros destacaron que las múltiples consecuencias de la pandemia de COVID-19 habían planteado retos mundiales sin precedentes para el avance del desarrollo social, lo que repercutió de manera desproporcionada en los más pobres y vulnerables. Además, la crisis ha agravado las desigualdades y vulnerabilidades, y ha afectado negativamente a la capacidad de los Gobiernos para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al mismo tiempo, la recuperación de la pandemia ofrece la oportunidad de introducir los cambios transformadores necesarios para construir sociedades más inclusivas, equitativas, resilientes y sostenibles, con la Agenda 2030 y los Objetivos como guía. Se reconoció que una política social eficaz, basada en las visiones, los principios y los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial, es clave para lograr una mejor recuperación. Una respuesta global coordinada es fundamental para ayudar a los países a preservar o aumentar el gasto social ahora y mientras se recuperan. Además, es necesario reforzar la solidaridad internacional, la cooperación multilateral y las asociaciones genuinas entre todas las partes interesadas, para recuperarse mejor y alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial y la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás.

II. Múltiples efectos de la pandemia de COVID-19 en el desarrollo social y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

3. Consciente de los efectos persistentes de la COVID-19, la Comisión de Desarrollo Social centró su debate sobre nuevas cuestiones en el tema “Políticas sociales para promover una recuperación más inclusiva, resiliente y sostenible: reconstruir para mejorar después de la COVID-19 con miras al logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década de acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Esta sección se basa en la nota de la Secretaría sobre nuevas cuestiones y el examen del tema por la Comisión ([E/CN.5/2021/4](#)).

A. Efectos sociales de la pandemia de COVID-19¹

4. A menos de 10 años de que concluya el plazo establecido para cumplir los objetivos de la Agenda 2030, la pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias devastadoras en el desarrollo social de todos los países. La crisis no solo ha puesto de manifiesto, sino que ha agravado, las desigualdades y debilidades que existían en los sistemas sociales y económicos actuales.

5. La COVID-19 ha dado lugar a un aumento de la pobreza extrema por primera vez desde 1998, en particular en los países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo, que dependen en gran medida del turismo, las remesas y los flujos de capital procedentes del exterior. En el nivel de los 1,90 dólares/día, se estima que el número de nuevos pobres a causa de la COVID-19 se situó entre 119 y 124 millones en 2020. Se prevé que esta cifra aumente hasta alcanzar entre 143 y 163 millones en 2021. Las familias con bajos ingresos han sido víctimas de la peor parte de la crisis, debido, entre otras cosas, a la pérdida de empleo, a una situación de vivienda cada vez más precaria y a un empeoramiento de la alimentación debido al cierre de escuelas.

6. La inseguridad alimentaria ha aumentado en todo el mundo, dado que las cadenas de suministro de alimentos mundiales y nacionales, ya sometidas a tensiones por el cambio climático y los conflictos, han sufrido interrupciones por las consecuencias de la COVID-19. Debido a la disminución de los ingresos y de las remesas y, en algunos contextos, al aumento de los precios de los alimentos, la pandemia podría abocar al hambre a 132 millones de personas más, lo que representaría casi el doble de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda hasta los 265 millones en 2020. Cada vez más familias se ven obligadas a racionar los alimentos, lo que provoca un aumento del retraso del crecimiento de los niños, con efectos negativos a largo plazo en su salud, bienestar y capacidad para alcanzar su pleno potencial.

7. El cierre de centros de trabajo, la reducción de la jornada laboral y la disminución de las fuentes de ingresos laborales y no laborales como consecuencia de la COVID-19 han provocado una contracción económica, lo cual socava gravemente la seguridad económica, los medios de vida a largo plazo y el bienestar de las personas en todo el mundo. Incluso antes de la COVID-19, en muchos países habían empeorado ya las condiciones del mercado laboral. Un total de 3.300 millones de personas (el 57 % de la población mundial en edad de trabajar) tenían un empleo informal. Los trabajadores del sector informal (como los jornaleros, los trabajadores agrícolas, los trabajadores domésticos y los trabajadores migrantes) suelen carecer de protección social, de derechos en el trabajo y de la seguridad económica necesaria para poder tomar licencias de enfermedad, lo que los hace más vulnerables a los contagios y la pérdida de ingresos. Los trabajadores poco remunerados y poco cualificados (1.250 millones o el 38 % de la mano de obra mundial) también resultaron muy afectados. En los países desarrollados, debido al aumento del empleo precario y de los nuevos tipos de trabajo (por ejemplo, los trabajadores de plataformas), un número cada vez mayor de trabajadores, especialmente jóvenes y

¹ La información presentada en esta sección se ha extraído de las siguientes fuentes: [A/76/61-E/2021/4](#); Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “The world of work and COVID-19” (junio de 2020) y “The politics of economic insecurity in the COVID-19 era” (nota de políticas núm. 91, 2021); Christoph Lakner y otros, “Últimas estimaciones del impacto de la COVID-19 en la pobreza mundial”, Banco Mundial, 11 de enero de 2021; Programa Mundial de Alimentos, “La COVID-19 duplicaría el número de personas que hacen frente a crisis alimentarias si no se actúa con rapidez”, 21 de abril de 2020; Organización Internacional del Trabajo, “Más de uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo a causa de la COVID-19”, 27 de mayo de 2020. **Error! Hyperlink reference not valid.**

mujeres, se enfrentan a la inseguridad laboral y son especialmente vulnerables a la pérdida de empleo/ingresos. La crisis está teniendo un efecto especialmente devastador en algunos grupos sociales del mercado laboral, como los jóvenes, las mujeres y los trabajadores inmigrantes, que están sobrerrepresentados en los sectores más afectados, como la hostelería, el comercio minorista y la construcción.

8. La crisis de la COVID-19 también ha agravado las desigualdades preexistentes y los grupos sociales marginados y desfavorecidos, como las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los niños y los adolescentes, son los más afectados. Las mujeres han experimentado un aumento de la inseguridad económica, del trabajo familiar y de cuidados no remunerado y de la violencia de género. Con la reducción o la pérdida de ingresos y las mayores dificultades para acceder a los servicios sanitarios durante la pandemia, muchas personas mayores y con discapacidad experimentaron graves efectos negativos en su bienestar. Los pueblos indígenas corren un riesgo especial de caer en la pobreza extrema. Debido al cierre de las escuelas, muchos niños perdieron las comidas que se les proporcionaban en el colegio, lo que provocó malnutrición y otros riesgos para la salud. Al verse interrumpido su acceso a la educación y la capacitación, la transición de los jóvenes de la educación al mercado laboral se ha vuelto extremadamente difícil y sus trayectorias profesionales se han visto interrumpidas. En 2020, más de uno de cada seis jóvenes se encontraba sin trabajo a causa de la COVID-19. Quienes tienen trabajo pueden enfrentarse a suspensión de empleo, desempleo y reducción de sus ingresos. La disminución de sus primeros ingresos también reduce sus perspectivas de ingresos futuros, lo cual repercute *de facto* en sus oportunidades de tener una vida productiva y plena.

9. El aumento de los niveles de pobreza, desigualdad e inseguridad económica, debido a los prolongados efectos de la COVID-19, socava aún más la confianza en las instituciones públicas, lo cual debilita la cohesión social y causa descontento social.

B. Respuestas a la COVID-19 en materia de políticas y estrategia para una mejor recuperación hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, sostenible y resiliente²

10. La pandemia de COVID-19 ha arrojado luz sobre las crecientes desigualdades y la inseguridad económica a las que se enfrenta la población. También ha puesto de relieve las lagunas que existen en los sistemas de protección social, así como las deficiencias de los sistemas de salud y educación, que fomentan las desigualdades estructurales. Incluso antes de la pandemia, aproximadamente 4.000 millones de personas no tenían ninguna forma de protección social, y muchas otras estaban protegidas solo de manera parcial.

² La información presentada en esta sección se ha extraído de Organización Internacional del Trabajo, *Informe mundial sobre la protección social 2017-19: la protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible* (2017) y “Respuestas de la Protección Social a la Crisis de COVID-19 en todo el mundo”, disponible en <https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417&lang=ES>; Banco Mundial, *Perspectivas Económicas Mundiales*, (junio de 2021); Véase Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, *World Economic Situation and Prospects 2021*; Alan Gelb y Anit Mukherjee, “Digital technology in social assistance transfers for COVID-19 relief: lessons from selected cases”, documento de política 181 (Center for Global Development, septiembre de 2021).

11. La crisis también ha puesto de manifiesto la importancia de una política socioeconómica eficaz para hacer frente a estas desigualdades. A diferencia de la crisis financiera mundial de 2008, los Gobiernos han adoptado rápidas medidas de respuesta de emergencia (principalmente en forma de paquetes de estímulo fiscal) para mitigar los efectos negativos inmediatos de la pandemia de COVID-19. Estas medidas incluyen recortes temporales de impuestos, ampliación de las prestaciones de protección social a personas que antes no estaban cubiertas y prestación de apoyo a las pequeñas empresas y de ayudas de liquidez. Muchos Gobiernos pusieron en marcha nuevas iniciativas de protección social, como subsidios y donaciones especiales, protección del empleo y la salud, y de los ingresos. Para apoyar a los más vulnerables, se han puesto en marcha medidas como las transferencias en efectivo, los programas de asistencia alimentaria y las prestaciones por hijos a cargo.

12. Gracias a estas oportunas medidas provisionales, financiadas mediante paquetes de estímulo de gran envergadura, se prevé que el crecimiento mundial repunte hasta el 5,6 % en 2021, el ritmo posterior a una recesión más vigoroso en 80 años. Sin embargo, las perspectivas de una recuperación enérgica son desiguales. Casi el 80 % de los 12,7 billones de dólares de estímulo fiscal en todo el mundo se ha distribuido principalmente en los países desarrollados. Mientras que la magnitud del estímulo en los países desarrollados supuso una media del 15,8 % de su producto interno bruto (PIB), el grupo de 46 países menos adelantados consiguió aumentar colectivamente el apoyo fiscal directo e indirecto en solo un 2,6 % de su PIB. Como consecuencia, las economías avanzadas se están recuperando, mientras que se prevé que muchas economías emergentes y en desarrollo retomen el ritmo lentamente. Muchos países de ingreso bajo corren el riesgo de quedarse atrás, debido no solo a la falta de acceso a las vacunas contra la COVID-19, sino también, entre otras cosas, al aumento de los niveles de deuda, la disminución de las remesas, el aumento del gasto social y la reducción de los ingresos tributarios. Es probable que los países más pobres y vulnerables queden más rezagados.

13. Si bien esas medidas provisionales son fundamentales para abordar las necesidades a corto plazo, una vez que concluyan, los beneficiarios quedarán en una situación tan vulnerable a las conmociones futuras como antes. Las repercusiones sociales negativas de las pandemias suelen prolongarse mucho tiempo tras la recuperación económica. Estos efectos perjudiciales afectarán especialmente a los niños y jóvenes, debido a la pérdida de oportunidades educativas y laborales. Poner fin a las medidas de emergencia de forma prematura supondría el riesgo de revertir los progresos realizados en muchos aspectos del desarrollo social. Los Gobiernos deben encontrar un equilibrio entre la promoción del crecimiento inclusivo y la prestación de un apoyo continuo y adecuado a los sectores y poblaciones más afectados por la crisis, al tiempo que velan por la sostenibilidad fiscal.

14. Para salvaguardar los medios de vida de las poblaciones desfavorecidas y vulnerables, la magnitud, la duración y las condiciones de las medidas de apoyo temporal deben optimizarse y utilizarse como trampolín para construir sistemas de protección social integrales que puedan proteger a las sociedades y a los sectores vulnerables de la población contra las conmociones futuras. La fase de recuperación tras la COVID-19 constituye una oportunidad para que los países inviertan en el diseño y la implantación de sistemas nacionales de protección social para ayudar a las personas y familias de los grupos sociales más vulnerables a mantener sus medios de vida, lo cual comprende la ampliación de la cobertura de la protección social para incluir a todos los trabajadores, independientemente del tipo de empleo. Los Gobiernos pueden adoptar medidas para asegurar los progresos logrados en la identificación y la cobertura de los beneficiarios, sustituyendo los tipos de ayuda puntuales por una red de protección social más permanente. Las capacidades digitales

desarrolladas durante la crisis de la COVID-19 deben seguir reforzándose para que los sistemas de protección social sean más inclusivos y eficaces.

15. Al mismo tiempo, es necesario crear un consenso social en torno a una visión común y a estrategias a largo plazo que sean integrales, centradas en las personas, inclusivas y resilientes para lograr una mejor recuperación y acelerar la implementación de la Agenda 2030, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello será necesario adoptar medidas audaces que aborden las causas fundamentales de las desigualdades y las privaciones. Los Gobiernos deben seguir promoviendo el crecimiento inclusivo, crear puestos de trabajo decentes y productivos, especialmente en las economías verdes, sostenibles y del cuidado, aprovechar las nuevas tecnologías, establecer o ampliar la cobertura de los sistemas de protección social apropiados para cada país, incluidos los niveles mínimos de protección social, y garantizar la prestación de servicios esenciales de alta calidad e infraestructura básica para todos. Las medidas selectivas deben garantizar la eliminación de las barreras sociales o jurídicas que afectan a los grupos marginados y desfavorecidos.

III. 59º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social

16. La Comisión de Desarrollo Social es el principal órgano intergubernamental encargado del seguimiento y examen de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. De acuerdo con las orientaciones del Presidente del Consejo Económico y Social sobre las limitaciones de las reuniones presenciales relacionadas con la COVID-19, la Comisión decidió actualizar las resoluciones recurrentes en su 59º período de sesiones. En esta sección se exponen los trabajos realizados en el 59º período de sesiones de la Comisión, que se reflejan en los proyectos de resolución aprobados sobre la organización y métodos de trabajo futuros de la Comisión ([E/CN.5/2021/L.4](#)), las dimensiones sociales de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África ([E/CN.5/2021/L.3/Rev.1](#)), la transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible: la función de las tecnologías digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos ([E/CN.5/2021/L.6](#)) y las políticas y programas relativos a la juventud ([E/CN.5/2021/L.5](#)). Los tres primeros proyectos de resolución fueron posteriormente aprobados por el Consejo.

17. Los Estados Miembros reconocieron que los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social seguían siendo tan pertinentes como siempre en el contexto de la pandemia de COVID-19, y que la Comisión había desempeñado un papel importante en la promoción de la protección social, la justicia social y la erradicación de la pobreza, así como en asegurar que nadie se quede atrás. Dado que la pandemia ha dejado al descubierto enormes disparidades en el acceso a la sanidad, la educación y el empleo en las distintas regiones, es necesario lograr una recuperación inclusiva y centrada en las personas para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables, del hambre, de la pérdida de ingresos y de empleo y de la violencia de género, así como para aumentar la resiliencia ante futuras crisis. La pandemia también puso de manifiesto la enorme brecha existente en el acceso a las tecnologías digitales, dado que la transformación digital se había acelerado con la COVID-19. Es necesario eliminar cuanto antes la brecha digital y promover la inclusión digital y, al mismo tiempo, abordar los nuevos riesgos que traían consigo las tecnologías digitales para garantizar el bienestar de todos.

18. En el foro ministerial relacionado con el lema “Promoción del multilateralismo para lograr una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible de la COVID-19 en el contexto de la década de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible y su dimensión social”, los ministros de diferentes regiones presentaron las políticas y

medidas nacionales que se estaban aplicando para hacer frente a las secuelas de la pandemia de COVID-19 e hicieron hincapié en la necesidad de reforzar el multilateralismo para garantizar una recuperación inclusiva y resiliente.

A. Tema prioritario: transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible: la función de las tecnologías digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos

1. Necesidad de una transición socialmente justa

19. Incluso antes de la COVID-19, se reconocía que la trayectoria actual del desarrollo económico no había conducido a una prosperidad compartida para todos, sino a unas desigualdades elevadas y crecientes en muchos países. Los múltiples efectos de la pandemia han agravado aún más las desigualdades socioeconómicas preexistentes, lo que ha tenido graves repercusiones en el desarrollo social y el bienestar de las personas, especialmente entre los más vulnerables.

20. La elevada desigualdad socava el crecimiento sostenido, dado que la desigualdad en el acceso a la educación de calidad y a otros servicios esenciales da lugar a que una gran proporción de la población tenga niveles de educación más bajos, menos competencias y un estado de salud deficiente, lo que genera una menor productividad y reduce el potencial de crecimiento. Las menores perspectivas de crecimiento dificultan la erradicación de la pobreza, lo que aumenta la necesidad de un mayor gasto social. La elevada desigualdad también aumenta los incidentes de violencia y corrupción, y erosiona la calidad de las relaciones sociales y el capital social de las poblaciones. La desigualdad también reduce el apoyo público a la protección del medio ambiente, debido a la polarización social y a la falta de confianza en las instituciones públicas.

21. Para lograr una transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible es necesario poner fin a las actuales modalidades de consumo y producción insostenibles que están agotando los recursos naturales y provocando daños ambientales irreversibles. Solo la producción de alimentos y la industria de la confección son responsables del 25 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, respectivamente. Las políticas futuras deben apoyar la disociación entre el crecimiento económico y la degradación ambiental, garantizar la gestión sostenible de los recursos y fomentar prácticas empresariales y comportamientos de consumo sostenibles.

2. Política social para promover una recuperación más inclusiva, resiliente y sostenible

22. Si bien la COVID-19 ha revertido decenios de logros de desarrollo, también ha desbloqueado recursos y voluntad política, y ha brindado una oportunidad sin precedentes de cambiar la trayectoria del desarrollo con el fin de permitir una transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible. En sus esfuerzos por recuperarse mejor, los países deben rediseñar políticas coherentes con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y abordar las causas fundamentales de la desigualdad y la vulnerabilidad. Esta transición socialmente justa debe implicar una nueva forma de concebir la actividad económica y el crecimiento como medio para lograr avances sostenibles en el bienestar y las capacidades humanas, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente.

23. Este marco de políticas orientado al futuro debería centrarse en la inversión en las capacidades y la resiliencia de las personas y en garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos de calidad (especialmente la educación

y la sanidad) y la protección social universal. También debe promover el trabajo decente para todos y fomentar la seguridad económica. Cerrar la brecha digital e invertir en infraestructura sostenible para facilitar la transición hacia economías más eficientes en el uso de los recursos y más ecológicas son también parte esencial de este marco.

24. Para todo ello, se necesitan asimismo sistemas multilaterales más sólidos y eficaces que puedan complementar y reforzar los esfuerzos de los países para situar al mundo firmemente en la senda del desarrollo sostenible. Además, son necesarios enfoques pangubernamentales y pansociales para que la recuperación en curso relacionada con la COVID-19 sea más vigorosa, más inclusiva y más resiliente desde el punto de vista económico, social y ambiental. Por último, la acción colectiva y la colaboración mundial son fundamentales para evitar la interrupción de la cadena mundial de suministro de alimentos, para que las vacunas y los tratamientos contra la COVID-19 sean asequibles y estén disponibles como bienes públicos mundiales, para fortalecer la situación financiera de los países en desarrollo y para emprender una recuperación que se rija por la Agenda 2030.

3. La COVID-19 y el papel de la tecnología digital³

25. Las tecnologías digitales han desempeñado un papel fundamental en la respuesta a la COVID-19, al permitir el teletrabajo, el aprendizaje a distancia y la provisión de bienes y servicios esenciales. La pandemia también ha acelerado la transformación digital. Las tecnologías digitales son fundamentales para una mejor recuperación y para la implementación de la Agenda 2030.

26. Más del 90 % de los ministerios de educación han promulgado algún tipo de política para promover el aprendizaje digital y la transmisión de educación a distancia. Por ejemplo, en la India, los gobiernos nacionales y estatales están poniendo en marcha sistemas de aprendizaje basados en códigos de respuesta rápida para ayudar a estudiantes y profesores a aprender y evaluar el rendimiento en tiempo real. El Gobierno de Fiji ofrece contenidos curriculares a través de la radio y de la iniciativa “Walesi”, un canal educativo específico en la televisión digital y por satélite, que está disponible a través de una aplicación móvil. Las tecnologías digitales ofrecen formas innovadoras de promover la educación de adultos y el aprendizaje permanente. Por ejemplo, en un entorno de trabajo principalmente remoto, la capacitación en realidad virtual puede intensificar el aprendizaje y la comprensión tanto de los aprendices como de los trabajadores experimentados. La educación digital inclusiva puede crear oportunidades de aprendizaje equitativas que incluyan a los grupos marginados y vulnerables, como las personas con discapacidad. La enseñanza combinada, es decir,

³ La información que se presenta en esta sección se ha extraído del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “COVID-19: are children able to continue learning during school closures?” (agosto de 2020); Pricewaterhousecoopers, “How virtual reality is redefining soft skills training”, disponible en www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/vr-study-2020.html; Grupo Banco Mundial, “Scaling up social assistance payments as part of the COVID-19 pandemic response” (2020); Sania Nishtar, “Ehsaas emergency cash: a digital solution to protect the vulnerable in Pakistan during the COVID-19 crisis” (Gobierno del Pakistán, octubre de 2020); Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “FAO and Rwanda sign new partnership to spur e-Commerce growth”, 5 de febrero de 2020; Banco Mundial, “Stimulating jobs, growth, entrepreneurship, income in rural China through e-commerce”, 22 de noviembre de 2019; FAO, “Food e-commerce: situation and perspective”, The Food System and the Challenges of COVID-19 Series (octubre de 2020); FAO, “Data-driven marketplaces for African agriculture, topic of third webinar”, 22 de julio de 2020, disponible en www.fao.org/support-to-investment/news/detail/en/c/1300642/; “Transition to the digital economy: technological capabilities as drivers or productivity”, en *The Least Developed Countries Report 2020: Productive Capacities for the New Decade* (publicación de las Naciones Unidas, 2020).

la integración de la educación en línea con los métodos tradicionales en el aula, permite la personalización de la docencia. Las nuevas plataformas digitales, incluidos los cursos en línea masivos y abiertos, permiten un acceso libre y una participación ilimitada. Entre los posibles beneficios se encuentran la reproducción a un costo más bajo de una enseñanza de alta calidad, el aprendizaje a ritmo propio y el análisis de datos para optimizar el aprendizaje.

27. Las tecnologías digitales han desempeñado un papel fundamental en la expansión masiva de los programas de transferencia social del Gobierno a la población desde el inicio de la crisis de la COVID-19. Las herramientas digitales han sido fundamentales para poner en marcha nuevos programas de ayuda de emergencia y aumentar el acceso a los programas existentes para ayudar a los “nuevos pobres” (normalmente trabajadores urbanos del sector informal) que han surgido a raíz de la crisis y que abarcan gran parte del vacío intermedio de los programas de asistencia social de los países en desarrollo. Las campañas de comunicación digital, el registro/la selección digital y los pagos por medios electrónicos han permitido la tramitación y el desembolso de millones de donaciones, en una escala que habría sido imposible sin ellos. Los países con una sólida infraestructura digital pudieron desembolsar la ayuda financiera de emergencia con mayor rapidez y eficacia que los que carecían de esas herramientas. Por ejemplo, el programa de socorro de emergencia Ehsaas, en el Pakistán, permite a las familias que cumplen los requisitos utilizar mensajes SMS para registrarse. Los miembros de la familia pueden recibir dinero en efectivo de los bancos, utilizando su tarjeta de identificación biométrica. En 2020, el Gobierno de Bangladesh, en colaboración con el sector privado, puso en marcha un programa de asistencia en efectivo a través del móvil. El programa de red de seguridad social digital Novissi, en el Togo, proporciona transferencias en efectivo bimensuales a los trabajadores vulnerables del sector informal.

28. Las tecnologías digitales han demostrado tener un gran potencial para mejorar la vida de las personas, impulsando la transformación socioeconómica, aumentando la productividad y mejorando la conectividad entre las economías nacionales e internacionales. El aumento exponencial del comercio electrónico ha creado nuevos puestos de trabajo y oportunidades de obtener ingresos, que tienen el potencial de estimular los ingresos de los hogares y sacar a las personas y comunidades de la pobreza y revitalizar las comunidades rurales. Por ejemplo, Rwanda puso en marcha en 2020 un proyecto destinado a reforzar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas para participar en el comercio electrónico y acceder al mercado internacional en línea. Colombia está apoyando a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas para que desarrollen sus conocimientos digitales, se dediquen al comercio electrónico y se establezcan mediante plataformas en línea. En China, el comercio electrónico está ayudando a revitalizar las aldeas rurales mediante la ampliación del acceso al mercado de los productores rurales. En Ghana, una plataforma de comercio electrónico entre empresas, Agrocenta, pone en contacto a los agricultores con los compradores, lo que les permite obtener un precio más alto por su producción.

29. Las tecnologías digitales pueden mejorar la productividad. En los países en desarrollo, las mujeres podrían aumentar el rendimiento de sus explotaciones entre un 20 % y un 30 % si tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres. El despliegue de tecnologías digitales con perspectiva de género representa un doble dividendo a la hora de cerrar las brechas de productividad y lograr una mayor igualdad de género. Los países están elaborando estrategias nacionales para apoyar sus economías digitales, como Digital 2020 en Marruecos y Digital Senegal 2025. Los recursos humanos son la piedra angular de esa transformación digital, y muchos Gobiernos están promoviendo el talento digital. Colombia apoya la formación de 100.000 programadores para el período 2021-2022. La rápida digitalización también

está acelerando el cambio hacia las finanzas digitales. Las herramientas digitales (por ejemplo, el dinero móvil y las billeteras electrónicas, la financiación colectiva, la puntuación de créditos alternativos y las remesas transfronterizas) tienen el potencial de respaldar la inclusión financiera de las personas y comunidades desatendidas y de ofrecer nuevas oportunidades de medios de vida y de mercado.

4. Deficiencias en el acceso digital y riesgos emergentes⁴

30. Al acelerar la transformación digital, la crisis de la COVID-19 también ha ampliado la brecha digital y ha agravado aún más las desigualdades existentes a su paso. Además, a pesar de todas sus ventajas y de las posibilidades que ofrecen, las tecnologías digitales no pueden resolver por sí solas cuestiones complejas, como el hambre, la pobreza, la desigualdad y los problemas ambientales. Más bien, las tecnologías digitales son una de las muchas herramientas disponibles para abordar las causas fundamentales de estos problemas.

31. La conectividad a Internet es un medio crucial para ayudar a las poblaciones vulnerables a salir de la pobreza. Sin embargo, existen importantes brechas digitales entre regiones y países. Poco más de la mitad de la población mundial utiliza Internet (53,6 %), mientras que el resto (3.600 millones de personas) no lo hace. Dentro de los países, las brechas digitales son evidentes, y los grupos ya desfavorecidos y marginados, especialmente los que tienen una educación limitada y un bajo nivel de alfabetización, están sobrerrepresentados en la población sin conexión.

32. Con el fin de superar los múltiples obstáculos a los que se enfrentaba la población sin conexión, en particular, la falta de acceso a la infraestructura y a los dispositivos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la inasequibilidad, la falta de alfabetización y competencias digitales, y la ausencia de contenidos pertinentes en línea, los Gobiernos deben adoptar un enfoque holístico e integrado en todos los sectores en colaboración con otras partes interesadas, como el sector privado. Un número cada vez mayor de países está formulando planes nacionales de conectividad para garantizar que nadie se quede sin conexión. Los países también están invirtiendo en competencias digitales y tomando medidas para que Internet sea más asequible mediante tarifas accesibles, tarifas subvencionadas y acceso gratuito. La crisis de la COVID-19 también ha aumentado la urgencia de cerrar la brecha digital de género. A medida que la educación empezó a impartirse en línea, las niñas se han visto desfavorecidas y discriminadas en muchos países, pues a menudo se ha dado prioridad a los niños para que tengan acceso a los dispositivos digitales y a Internet⁵. Desde entonces, millones de niñas no han vuelto a la escuela debido al aumento de los matrimonios precoces y forzados entre las niñas, los embarazos en la adolescencia y el trabajo infantil.

⁴ La información que se presenta en la sección se ha extraído de Unión Internacional de Telecomunicaciones, “New ITU data reveal growing Internet uptake but a widening digital gender divide”, 5 de noviembre de 2019; Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales* (Washington D. C., 2016); Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, *Perspectivas del empleo 2020: La seguridad de los trabajadores y la crisis de la COVID-19* (París, 2020); Foro Económico Mundial, *The Future of Jobs Report 2020* (octubre 2020); Comisión Europea, “Digital skills and Jobs”, disponible en <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs>; Sara Riso, “COVID-19: fast-forward to a new era of employee surveillance”, Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 9 de diciembre de 2020; Save the Children, “The global girlhood report 2020: how COVID-19 is putting progress in peril” (Londres, 2020).

⁵ Véase Diogo Amaro y otros, “COVID-19 and education: the digital gender divide among adolescents in sub-Saharan Africa”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 4 de agosto de 2020.

33. La inclusión digital desempeña un papel fundamental en el avance de la inclusión social, el trabajo decente y el bienestar de todos. Dado que factores como la ubicación, el género, la edad y la discapacidad son predictivos del acceso a Internet, las políticas, programas y estrategias específicos y adaptados a las necesidades de los grupos desfavorecidos y marginados (especialmente mujeres, niños y jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y familias pobres) pueden ayudar a cerrar la brecha digital. Por ejemplo, las personas con discapacidad se enfrentan a menudo a barreras de accesibilidad física para utilizar las tecnologías digitales debido a sus dificultades.

34. La automatización y las tecnologías digitales, como por ejemplo, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la robótica, han demostrado ser valiosas para mejorar la eficiencia productiva en el mundo del trabajo. Sin embargo, estas transformaciones también han aumentado la polarización del mercado laboral, a través del "vaciamiento" de las ocupaciones de cualificación media, y han tenido efectos adversos en las desigualdades de ingresos y salarios. Hasta la fecha, los trabajadores altamente cualificados son los que más se han beneficiado de las nuevas tecnologías, mientras que los trabajadores poco y medianamente cualificados, dedicados a tareas manuales y cognitivas rutinarias, están viendo cómo se reducen sus oportunidades. La crisis de la COVID-19 ha aumentado el ritmo de la automatización y la digitalización del trabajo y ha acelerado, a su vez, las disrupciones de los puestos de trabajo basados en la tecnología para los trabajadores que carecen de las competencias digitales necesarias o no pueden acceder a las oportunidades de recualificación. Según una estimación, de aquí a 2025, podrían desplazarse 85 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, mientras que podrían crearse 97 millones de nuevos empleos debido al cambio en la división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos.

35. Dentro del mercado laboral, el crecimiento del trabajo en plataformas está poniendo en tela de juicio los sistemas de protección social de muchos países desarrollados, que se establecieron sobre el modelo general de contratos de trabajo a tiempo completo y de larga duración. Los trabajadores de plataformas no tienen los mismos derechos que los empleados a tiempo completo en lo que respecta a la cobertura de las pensiones, la licencia parental remunerada, la licencia de enfermedad o el derecho a las medidas de apoyo a los ingresos.

36. En todo el mundo, muchas personas carecen de las competencias digitales necesarias para una sociedad y una economía digitales. En Europa, la previsión para 2020 era un déficit de más de 500.000 profesionales de las TIC y el 42 % de los ciudadanos europeos carecen de competencias digitales básicas. La inversión en la capacitación adicional en competencias digitales de los trabajadores a través del aprendizaje permanente es necesaria para satisfacer las necesidades actuales y futuras del mercado laboral. Aunque los jóvenes tienen más probabilidades de conectarse a Internet, con frecuencia carecen de las competencias digitales de índole profesional que demanda el mercado de trabajo. Los Gobiernos pueden dar más prioridad a las competencias digitales en los planes de estudio y colaborar con el sector privado para crear programas de capacitación y formación profesional que ofrezcan formación en el empleo en competencias digitales. Deben crearse incentivos para que las empresas digitales contraten y formen a más mujeres y promuevan la modalidad de trabajo flexible. Los Gobiernos también deberían invertir en proporcionar a todos los niños acceso a la tecnología y dotar a los jóvenes de competencias digitales y en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay que animar a las chicas a destacar en estos campos. Es importante garantizar que los logros alcanzados en materia de igualdad de género no se erosionen, porque la tecnología digital puede convertirse en una herramienta que perpetúe la discriminación y la violencia de género.

37. Los riesgos y la ética que rodean el uso de las tecnologías digitales, como la información errónea, el derecho a la privacidad, la protección de la identidad digital, el acoso en línea, los cambios en el mundo del trabajo y los prejuicios inconscientes en la inteligencia artificial, deben abordarse en un debate público y han de establecerse protecciones para evitarlos. A través de la participación pública y la actualización de los marcos regulatorios, los países deben impulsar la transformación digital con el fin de construir sociedades mejores al tiempo que velan por que la innovación digital respalde tanto las necesidades sociales como las empresariales. Hay varias herramientas que pueden ayudar a prevenir y mitigar los prejuicios en los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, la capacitación, la sensibilización y la promoción de la diversidad entre los programadores y desarrolladores de inteligencia artificial. A nivel social, esto requiere la creación de ecosistemas institucionales y legislativos, con los incentivos correctos, la capacidad adecuada y las normas y procesos establecidos para auditar y proporcionar reparación.

38. La garantía de la privacidad, la seguridad y la gestión responsable de los datos en la economía digital es un derecho humano fundamental. Sin embargo, los problemas abundan, porque los marcos jurídicos luchan por seguir el ritmo de los cambios tecnológicos. Por ejemplo, el trabajo a distancia está facilitando el rastreo de los empleados a través de programas y aplicaciones digitales, al tiempo que plantea las cuestiones de la identificación de las necesidades empresariales legítimas y la privacidad de los empleados.

B. Dimensiones sociales de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y políticas y programas relacionados con la juventud

39. En el 59º período de sesiones de la Comisión, se examinaron las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 en África y la respuesta de los países africanos y sus socios, incluido el sistema de las Naciones Unidas. Aunque la crisis ha provocado retrocesos en los avances en materia de desarrollo obtenidos a costa de mucho esfuerzo, como la reducción de la pobreza y la desigualdad entre los géneros, también ofrece la oportunidad de promover un cambio de paradigma y de reajustar las políticas socioeconómicas para garantizar una mejor recuperación para todos. Los países africanos deben seguir dando prioridad a las políticas que mejoren el sector de la salud, erradiquen la pobreza extrema, combatan la desigualdad, en particular la de género, y proporcionen una educación de calidad y empleos decentes para todos, con el fin de recuperarse mejor de la crisis de la COVID-19 y acelerar el crecimiento inclusivo durante la década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

40. En el 59º período de sesiones de la Comisión, también se examinaron tres cuestiones temáticas relacionadas con el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, a saber, la mitigación de la pobreza de los jóvenes, la economía mundial digital y los jóvenes y la justicia penal, y se instó a los Estados Miembros y a todas las partes interesadas a que adoptaran medidas concertadas para cerrar las brechas digitales, incluida la brecha digital de los jóvenes, promover la inclusión digital y el uso responsable de las TIC, impedir su uso con fines delictivos y reducir la brecha de género en el acceso y las competencias digitales, así como acelerar la función catalizadora que desempeñan las tecnologías digitales para reducir los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la educación, la salud, la comunicación, el comercio y la continuidad de las operaciones. Se pide a los Estados Miembros que promuevan la innovación entre los jóvenes garantizando la integración plena y adecuada de las TIC en la educación y la capacitación a todos los niveles (elaboración de planes de estudio, formación de profesores y administración y gestión institucionales).

IV. Mantener o aumentar el gasto social y utilizar el presupuesto de desarrollo social de manera más eficiente para una mejor recuperación

41. En todo el mundo, la drástica caída de los ingresos tributarios y el aumento de las necesidades de gasto de emergencia en respuesta a la pandemia de COVID-19 han aumentado los déficits fiscales y empeorado los niveles de endeudamiento público. Aunque todos los países están gravemente afectados, existe el riesgo de que se produzca una respuesta global bifurcada. Los países desarrollados se están recuperando gracias a las vigorosas medidas de estímulo adoptadas en una escala sin precedentes y al acceso generalizado a las vacunas, mientras que los países en desarrollo están luchando para financiar las medidas de respuesta y recuperación adecuadas debido a la falta de liquidez y de margen fiscal, así como al riesgo de problemas de sobreendeudamiento público.

42. Los esfuerzos nacionales e internacionales deben ir de la mano en la creación del margen fiscal necesario para salvaguardar los logros en materia de desarrollo, apoyar una respuesta eficaz a la COVID-19, evitar un empeoramiento más grave de la desigualdad entre los países, permitir una mejor recuperación y retomar el camino de la ejecución de los resultados de la Cumbre Mundial y la Agenda 2030. A escala nacional, es necesario preservar o aumentar el gasto social para reducir la pobreza y las desigualdades, promover el trabajo decente para todos y fomentar la inclusión digital y social. Los países deben redoblar sus esfuerzos para promover reformas fiscales progresivas y orientar el gasto público hacia la inversión en las personas, con el fin de crear sociedades más resilientes. Para ello, es necesario contar con el respaldo de la acción colectiva mundial y la solidaridad. La cooperación fiscal internacional sigue siendo esencial para combatir la evasión de impuestos y la elusión fiscal. La provisión de una mayor liquidez internacional a los países en desarrollo y una acción coordinada para proporcionar un alivio de la deuda, junto con, entre otras cosas, una reforma a largo plazo de la arquitectura de la deuda multilateral, podría proporcionar a los países en desarrollo el margen fiscal que necesitan sin obstaculizar su desarrollo futuro.

43. En vista de las consecuencias devastadoras de la crisis de la COVID-19 en el margen fiscal nacional para apoyar el desarrollo social, especialmente en los países en desarrollo, el siguiente análisis hace hincapié en el papel de la cooperación internacional y regional. Debe leerse junto con el informe del Secretario General de 2020 (A/75/216), que presenta con mayor detalle el papel crucial de la movilización de recursos internos para mantener y aumentar el gasto social.

A. Cooperación internacional y regional a fin de crear margen de maniobra fiscal para el desarrollo social⁶

44. Se prevé que las repercusiones de la pandemia de COVID-19 serán más graves y duraderas en los países en desarrollo que las de la crisis financiera de 2008. El inicio de la crisis económica causada por la COVID-19 se caracterizó por niveles sin precedentes de salida de capitales, depreciaciones de la moneda y pérdida de ingresos por exportaciones, así como por la caída de los precios de las materias primas y la disminución de los ingresos generados por el turismo. Aunque las economías

⁶ La información que se presenta en esta sección se ha extraído de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), “The COVID-19 shock to developing countries: towards a ‘whatever it takes’ programme for the two-thirds of the world’s population being left behind” (marzo de 2020); Declaración de los líderes del Grupo de los 20 sobre la COVID-19, 26 de marzo de 2020, disponible en <https://reliefweb.int/report/world/g20-leaders-statement-extraordinary-g20-leaders-summit-statement-covid-19>.

avanzadas también se han visto gravemente afectadas, el crecimiento seguirá resultando reforzado por las extraordinarias medidas fiscales y monetarias que han amortiguado las repercusiones socioeconómicas de la pandemia.

45. Aunque la salida de capitales se ha estabilizado recientemente en los países en desarrollo y algunos han podido acceder a los mercados internacionales de capitales a un costo relativamente bajo, muchos países en desarrollo carecen de la capacidad monetaria, fiscal y administrativa suficiente para responder eficazmente a la crisis, lo que supone un retroceso en su progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nivel internacional, la cooperación multilateral es de vital importancia. Los países del Grupo de los 20 están llevando a cabo acciones concretas para cumplir su compromiso de proporcionar una respuesta global con espíritu de solidaridad. Esto implica aprovechar el sistema financiero internacional para crear el tan necesario margen fiscal para que los países en desarrollo pongan en marcha paquetes eficaces de respuesta a la crisis.

1. Satisfacción de las necesidades financieros de los países en desarrollo⁷

46. Garantizar que los recursos de las instituciones financieras internacionales estén a la altura de las necesidades de financiación de los países en desarrollo contribuirá a reforzar su recuperación. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que los países en desarrollo necesitarían 2,5 billones de dólares más en requisitos de financiación y liquidez para superar la crisis. A finales de mayo de 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había aprobado una financiación de casi 110.000 millones de dólares para 84 países y había concedido 726 millones de dólares en concepto de alivio de la deuda para 29 de sus miembros más pobres. Para satisfacer las necesidades de financiación de los países, es necesario aumentar la financiación en condiciones favorables. Este imperativo subyace a los debates en curso con el fin de crear fondos multilaterales para la reasignación de recursos de los países desarrollados a los países en desarrollo. Una iniciativa es el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19, propuesto por el Gobierno de Costa Rica, que se financiará con recursos de los países desarrollados y se canalizará a través de los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario emprender medidas para reducir los costos por préstamos para los países vulnerables. Una de las propuestas, de la Comisión Económica para África, es la creación de un mecanismo de liquidez y sostenibilidad, que reduciría los costos por préstamos de los Gobiernos al aumentar la demanda de sus bonos soberanos.

47. El fortalecimiento de la cooperación regional a través de la mejora de la capacidad de respuesta de los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales en materia de concesión de préstamos podría ayudar a los países a reconstruirse mejor y a reforzar su resiliencia ante futuras crisis. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo y los bancos subregionales de desarrollo han comprometido 8.000 y 12.000 millones de dólares, respectivamente.

⁷ La información presentada en esta sección se ha extraído de UNCTAD, “UN calls for \$2.5 trillion coronavirus crisis package for developing countries”, 30 de marzo de 2020; Fondo Monetario Internacional, “COVID-19 financial assistance and debt service relief”, que puede consultarse en: www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después”, Informe Especial núm. 10, 11 de marzo de 2021; Fondo Monetario Internacional, “IMF members’ quotas and voting power, and IMF Board of Governors”, disponible en <https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx>; Andrea Shalal, “IMF eyes new trust to provide aid to broader group of countries – Georgiva”, Reuters, 13 de junio de 2021; *Financing for Sustainable Development Report 2019* (publicación de la Naciones Unidas, 2019); *Informe para el Desarrollo Sostenible 2021* (publicación de las Naciones Unidas, 2021).

48. Los derechos especiales de giro tienen un importante papel que desempeñar como parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a los países vulnerables a hacer frente a las consecuencias de la crisis de la COVID-19. La nueva emisión de los derechos especiales de giro del FMI es una forma eficaz de complementar las reservas internacionales de los países miembros, como ocurrió con la anterior asignación tras la crisis financiera mundial. En marzo de 2021, el Grupo de los 20 aprobó una nueva emisión de derechos especiales de giro por parte del FMI, que se espera que alcance la cantidad sin precedentes de 650.000 millones de dólares. A los países en desarrollo se les asignaría aproximadamente el 40 % de los derechos especiales de giro recién emitidos, mientras que el resto se destinará a los países desarrollados. Además, se está debatiendo la posibilidad de canalizar los derechos especiales de giro, tanto los de nueva emisión como los ya existentes y no utilizados, de los países con fuertes posiciones de reserva exterior a los países más necesitados. Se han propuesto varios mecanismos, desde la utilización del actual Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del FMI para canalizar los derechos especiales de giro hacia los países de ingreso bajo, hasta la creación de un nuevo fondo fiduciario para la resiliencia y la sostenibilidad en el FMI que sea accesible a los países de ingreso mediano asolados por la COVID-19 o el cambio climático y que pueda utilizarse para financiar el gasto en salud/vacunas y en una recuperación ecológica.

49. Estas medidas excepcionales no deben desviar la atención de la necesidad de cumplir los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) con los países en desarrollo para alcanzar el objetivo del 0,7 % del ingreso nacional bruto de los donantes. La AOD aumentó un 0,7 % en 2019, hasta los 155.000 millones de dólares en términos reales, mientras que disminuyó ligeramente como proporción del ingreso nacional bruto de los países donantes, del 0,31 % al 0,30 % de media. Aunque los sectores sociales representan la mayor parte de las asignaciones de la AOD, ese porcentaje ha ido disminuyendo en los últimos años y ha pasado del 40 % en 2010 al 35 % en 2017. La AOD para la educación se ha estancado desde 2009, después de haberse duplicado a principios de la década de 2000. En general, los sistemas de protección social reciben bajos niveles de AOD (una media de 1.100 millones de dólares anuales entre 2007 y 2017), sobre todo en comparación con los que se asignan a servicios sociales como la salud y la educación (una media de 5.600 y 9.200 millones de dólares anuales, respectivamente, durante el mismo período). Las repercusiones de la crisis de la COVID-19 en los resultados de la AOD para 2020 son inciertas: mientras que algunos de los principales donantes aumentaron sus presupuestos de cooperación para el desarrollo, otros sucumbieron a la presión fiscal interna y recortaron la AOD. La ambiciosa reposición de fondos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y la decimosexta reposición del Fondo Africano de Desarrollo en 2022 contribuirán a proporcionar financiación en forma de donaciones donde más se necesita.

2. Apoyar la gestión y el alivio de la deuda mediante la reforma de la arquitectura de la deuda internacional⁸

50. La crisis de la COVID-19 ha agravado la vulnerabilidad de la deuda preexistente y ha aumentado el riesgo de sobreendeudamiento, lo cual ha obstaculizado la capacidad de los países en desarrollo para hacer frente a la crisis sanitaria, la inseguridad alimentaria y las crecientes tasas de desempleo y pobreza, así como para invertir en la acción climática. Incluso antes de la crisis, unos 64 países de ingreso bajo gastaban más en el servicio de la deuda que en sus sistemas sanitarios.

⁸ Véase Jubilee Debt Campaign, “Sixty-four countries spend more on debt payments than health”, 12 de abril de 2020; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después”; UNCTAD, “The COVID-19 shock to developing countries”.

Estos crecientes niveles de endeudamiento amenazan la capacidad de los países en desarrollo de poner en marcha medidas para emprender una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, la región más endeudada del mundo en desarrollo, se espera que la deuda pública a nivel regional haya aumentado del 68,9 % en 2019 al 79,3 % en 2020.

51. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, acordada por el Grupo de los 20 en abril de 2020 para aliviar a las economías que sufren la vulnerabilidad de la deuda pública externa, ofrece una suspensión temporal de la amortización de los préstamos de los acreedores bilaterales oficiales a 73 países de la Asociación Internacional de Fomento. En noviembre de 2020, y reconociendo que la gravedad de los problemas de la deuda en varios países exige medidas más contundentes, el Grupo de los 20 puso en marcha el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda más allá de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, que prevé prórrogas de los plazos de vencimiento y una quita de la deuda en casos excepcionales. Sin embargo, tanto la Iniciativa como el Marco Común siguen siendo limitados: no se aplican a los países de ingreso mediano más vulnerables ni a los pequeños Estados insulares en desarrollo, que tienen más de dos tercios de los pagos estimados del servicio de la deuda pública externa en riesgo⁹ y han experimentado una participación menor de la esperada, debido en parte al temor a las rebajas de la calificación crediticia. Además, el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes del FMI también proporciona alivio del servicio de la deuda a 29 de sus países miembros más pobres y vulnerables.

52. Para sentar las bases de un entorno propicio para la inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible al tiempo que se preservan los niveles de deuda sostenible, cada vez son más las voces que reclaman un alivio de la deuda inmediato o a corto plazo. Esto incluye el alivio del sector público a través del Marco Común para el Tratamiento de la Deuda más allá de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda y nuevos esfuerzos para explorar las iniciativas climáticas de permuta y recompra de deuda. También se están considerando cada vez más los instrumentos de deuda contingente, como las cláusulas por huracanes, que permitirían una moratoria automática de la deuda. Puede ser necesario un enfoque amplio y múltiple para abordar las deficiencias de la arquitectura financiera internacional. Esto podría incluir una serie de reformas, desde las basadas en el mercado hasta las medidas legales, pasando por el alivio de la deuda y la reestructuración de las economías que atraviesan dificultades, supervisadas por una autoridad de la deuda creada de forma independiente. La creación de un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda, supervisado por una autoridad independiente de la deuda, podría contribuir a garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores privados.

3. Creación de una arquitectura financiera internacional más sostenible y resiliente¹⁰

53. Más allá de la apremiante necesidad de crear un margen fiscal suficiente para una recuperación global sostenible, el aumento generalizado de los desequilibrios

⁹ Véase Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Sovereign debt vulnerabilities in developing countries: which countries are vulnerable and how much debt is at risk?” (marzo de 2021).

¹⁰ Véase Tax Justice Network, “The state of tax justice 2020”, 20 de noviembre de 2020; *Informe para el Desarrollo Sostenible 2021* (publicación de las Naciones Unidas, 2021); foro del Consejo Económico y Social sobre el seguimiento de la financiación para el desarrollo (E/FFDF/2021/L.1); Véase Naciones Unidas, “Financing for the Development in the Era of COVID-19 and Beyond Initiative (FFDI)”, disponible en www.un.org/en/coronavirus/financing-development.

fiscales y del endeudamiento ha estimulado un impulso compartido dentro de la comunidad internacional en pro de una arquitectura financiera internacional más justa y resiliente que permita que la recuperación en curso de la COVID-19 sea más sólida, inclusiva y resistente. Bajo los auspicios del sistema de las Naciones Unidas, el Evento de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo en la Era de la COVID-19 y más allá, celebrado en mayo de 2020, dio inicio a un proceso de reflexión a través de seis grupos de trabajo temáticos sobre la reforma de la arquitectura financiera mundial que contribuirán a impulsar este proceso de reforma. Este trabajo se está llevando a cabo en seis grupos temáticos a través del sistema de las Naciones Unidas.

54. El mundo está presenciando un impulso hacia una mayor cooperación fiscal internacional, que sigue siendo esencial para los esfuerzos más amplios de lucha contra los flujos financieros ilícitos, así como la elusión de impuestos y la evasión fiscal. Las estimaciones de la evasión fiscal individual y del traslado de beneficios de las empresas multinacionales, basadas en la combinación de múltiples fuentes de datos incompletos, concluyen que los países pierden unos 400.000 millones de dólares anuales por las dos prácticas mencionadas, lo cual merma la inversión pública en desarrollo sostenible, incluida la financiación de una respuesta a la COVID-19 y una recuperación sostenible y resiliente. Se han logrado avances significativos en materia de transparencia fiscal y, en el contexto de la creciente digitalización, un amplio subconjunto de Estados Miembros está debatiendo reformas de las normas fiscales internacionales. Las propuestas que se están negociando incluyen la reasignación de algunos derechos fiscales y el acuerdo sobre un tipo mínimo mundial del impuesto de sociedades. En el establecimiento de normas fiscales, los intereses y los puntos de vista de las economías en desarrollo merecen recibir más atención y prioridad. La comunidad mundial podría hacer más por incluir a todos de manera efectiva en los procesos de fijación de las normas tributarias, la adaptación de las normas y las prácticas tributarias a la realidad y las necesidades de los países en desarrollo.

55. Los bancos de desarrollo podrían apoyar aún más la recuperación resiliente y sostenible cambiando sus prioridades de concesión de préstamos, por ejemplo, transformando la composición de sus carteras de préstamos para favorecer una mayor proporción de inversiones verdes y proyectos relacionados con el cambio climático. Esto también significa explorar opciones para proporcionar financiación sostenible a largo plazo a los países más vulnerables, entre otras cosas, mediante préstamos a plazo fijo, de modo que los países puedan aprovechar los tipos de interés mundiales ultrabajos, ampliando los vencimientos de los préstamos y explorando opciones para proporcionar donaciones o financiación a muy largo plazo (por ejemplo, 50 años) a los países en desarrollo con el fin de invertir en crecimiento a largo plazo y desarrollo sostenible.

56. Las remesas son un salvavidas fundamental para millones de personas en todo el mundo y lo han seguido siendo durante la crisis de COVID-19. El dinero que envían a casa los trabajadores migrantes sostiene la vida de una de cada nueve personas en todo el mundo (unos 800 millones de personas), pues les ayuda a cubrir los costos de los bienes esenciales de la vida diaria, como la comida, los gastos médicos y de vivienda y las tasas escolares. Desafiando las predicciones, los flujos de remesas han resistido durante la crisis. En 2020, los flujos de remesas registrados oficialmente hacia los países de ingreso bajo y mediano ascendieron a 540.000 millones de dólares, solo un 1,6 % menos que los 548.000 millones enviados en 2019. Sin embargo, el envío de remesas sigue siendo caro. Las tasas de remesas superaron el 6,5 % de media en el cuarto trimestre de 2020, más del doble de la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible del 3 % para 2030. El costo medio de las remesas osciló entre el 4,9 % en Asia Meridional y el 8,2 % en el África Subsahariana. Es necesario realizar más esfuerzos en la infraestructura de remesas para reducir estos costos de transacción.

B. Movilización de recursos internos para mantener y aumentar el gasto social¹¹

57. Las finanzas públicas nacionales siguen siendo la principal fuente de financiación del gasto social en todo el mundo. El informe 2021 del Secretario General sobre la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial ([A/75/216](#)) ofrece una visión general del papel fundamental que desempeña la movilización de recursos internos para preservar y aumentar el gasto social. En el ámbito de la educación, los fondos públicos nacionales representan el 79 % del gasto mundial. Menos del 1 % del gasto mundial en salud se cubre con ayuda externa, por lo que el gasto interno es crucial para hacer realidad la cobertura sanitaria universal. La conmoción de la COVID-19 puso aún más en evidencia las insuficiencias ya existentes en los sistemas de salud y protección social.

58. El aumento significativo de la movilización de recursos internos requerirá un crecimiento económico en la mayoría de los países. La crisis de la COVID-19 ha paralizado las economías de los países y ha agotado sus presupuestos nacionales, con lo cual ha puesto en peligro el gasto esencial en servicios públicos que son cruciales para el desarrollo social y el crecimiento a largo plazo. Impulsada por la fuerte recuperación de China y Estados Unidos, se prevé que la economía mundial crezca un 5,4 % en 2021. Sin embargo, este panorama mundial enmascara el hecho de que el crecimiento de varios países de Asia Meridional, África Subsahariana y América Latina y el Caribe es todavía frágil e incierto. En una amplia mayoría de los países en desarrollo, la producción económica se mantendrá por debajo de los niveles de 2019 durante la mayor parte de 2021.

59. La trayectoria del crecimiento económico está estrechamente vinculada a los plazos de vacunación, por lo que el acceso a la vacuna de la COVID-19 es un factor importante para la recuperación económica y, por extensión, para la movilización de recursos nacionales destinados a una mejor recuperación. En los países desarrollados, la distribución de vacunas con más rapidez de lo que se esperaba en 2021 contrasta de forma drástica con el acceso limitado en los países en desarrollo, en particular en África. El acceso oportuno y universal a vacunas, tratamientos y diagnósticos seguros y asequibles contra la COVID-19, también a través del Acelerador ACT y su Mecanismo COVAX, el reparto de dosis, el fortalecimiento de las capacidades de distribución y la aceleración de la producción de vacunas en cooperación con el sector privado, seguirá siendo fundamental para garantizar la recuperación amplia e inclusiva de la economía mundial.

60. Es necesario mantener las medidas fiscales excepcionales adecuadas, en particular, medidas de salud pública y de gasto social, durante el tiempo necesario para garantizar una respuesta de salud pública contundente, el apoyo necesario a los grupos vulnerables y una recuperación socioeconómica inclusiva. Un paso precipitado hacia las medidas de austeridad, como el que prevaleció tras la crisis financiera de 2008, afectaría desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables y frenaría la recuperación de los países. Invertir en las personas a través del mantenimiento o el aumento del gasto en servicios públicos, como la educación de calidad, la atención sanitaria y los sistemas de protección social, y situar la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro de una recuperación ecológica, resiliente e inclusiva contribuirá a la consecución de la Agenda 2030.

61. La mejora de la movilización de los recursos nacionales mediante sistemas fiscales sostenibles, transparentes y que permitan la rendición de cuentas puede dar

¹¹ Véase Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “World economic situation and prospects as of mid-2021”, 11 de mayo de 2021; [A/75/216](#).

lugar a sociedades más justas e inclusivas. Se trata de reforzar las capacidades de la administración de los ingresos para conseguir sistemas fiscales progresivos, en línea con la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. La dependencia de los países en desarrollo de los impuestos indirectos, como los impuestos sobre las ventas y el valor añadido, corre el riesgo de crear sistemas fiscales regresivos si no se calibran cuidadosamente los marcos de ingresos y gastos. Los diferentes umbrales de impuestos y transferencias, así como los problemas de focalización del gasto, pueden dar lugar a un empeoramiento de la pobreza para algunos grupos, incluso cuando el sistema fiscal mejora la situación de otros.

62. Del mismo modo, la mejora de la recaudación de los impuestos directos, sobre todo del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio, podría proporcionar ingresos adicionales para ayudar a abordar las crecientes desigualdades y garantizar unos resultados sociales más equitativos. En muchos países en desarrollo, la informalidad generalizada en el mercado laboral sigue siendo un obstáculo importante para la recaudación del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Los impuestos correctivos dirigidos a cuestiones de salud pública (por ejemplo, el alcohol, el tabaco y los alimentos con alto contenido de azúcar) podrían diversificar y aumentar los ingresos tributarios. Asimismo, los impuestos y tasas relacionados con el medio ambiente, como los impuestos sobre el carbono o las tasas sobre los vehículos contaminantes, pueden tener efectos positivos en la movilización de recursos, en el medio ambiente y en la salud y el bienestar humanos. Primar los sistemas y los gastos fiscales progresivos y eficaces también conlleva la creación de una capacidad administrativa y en materia de políticas que permita la imposición efectiva y eficiente de la economía digital. Los países no pueden conseguirlo solos y la cooperación internacional sigue siendo fundamental. El Secretario General también ha pedido que se establezca una forma de impuesto de solidaridad vinculado a la COVID-19 para reducir las desigualdades extremas de riqueza, que podría tomarse en consideración.

V. Conclusiones y recomendaciones en materia de políticas

63. Cuando faltan menos de 10 años para que se cumplan los objetivos de la Agenda 2030, el mundo se enfrenta a los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19, que afecta de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables. No solo ha puesto de manifiesto y agravado las desigualdades y debilidades preexistentes en los actuales sistemas de protección social, salud y educación, sino que también ha afectado negativamente a las capacidades de los Gobiernos para implementar la Agenda 2030 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pandemia ha acelerado la transformación digital, al tiempo que ha ampliado la brecha digital existente. También podría revertir decenios de avances logrados hasta la fecha en materia de desarrollo social.

64. Al mismo tiempo, la pandemia ha desbloqueado recursos y voluntad política, y ha brindado una oportunidad sin precedentes de cambiar la trayectoria del desarrollo con el fin de permitir una transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible. En sus esfuerzos por recuperarse mejor, los países deben rediseñar las políticas socioeconómicas a largo plazo para construir sociedades más inclusivas, equitativas, resilientes y sostenibles, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía.

65. Como medidas complementarias de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social para acelerar los progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Asamblea General tal vez desee considerar las siguientes recomendaciones:

a) Desarrollar un marco de políticas con visión de futuro, centrado en la inversión en las capacidades y la resiliencia de las personas, que garantice la igualdad de oportunidades y el acceso a una educación de calidad, a la asistencia sanitaria y a la protección social universal, que promueva el trabajo decente para todos, fomente la seguridad económica, cierre la brecha digital e invierta en infraestructuras sostenibles para facilitar la transición hacia economías más eficientes en el uso de los recursos y más ecológicas;

b) Movilizar la solidaridad y la cooperación mundiales para proporcionar un acceso equitativo a las vacunas y los tratamientos contra la COVID-19, y fortalecer los sistemas de salud y la situación financiera de los países en desarrollo para permitir una recuperación inclusiva y resiliente que se rija por la Agenda 2030;

c) Establecer estrategias nacionales para respaldar a las economías digitales y cerrar la brecha digital, también mediante la inversión en competencias digitales y la accesibilidad y asequibilidad de la infraestructura y los dispositivos digitales;

d) Sobre la base de las capacidades digitales desarrolladas durante la crisis, mejorar la prestación y la accesibilidad de los servicios sociales, en particular la educación de calidad para todos y la atención sanitaria universal, y reforzar los sistemas de protección social para hacerlos más inclusivos y eficaces, mediante la inversión en infraestructura digital nacional (incluidos los sistemas de identificación digital y los sistemas de pago digitalizados y los registros sociales) y la consolidación de los progresos realizados en la identificación y la cobertura de los beneficiarios que hasta ahora no se tenían en cuenta, como los trabajadores informales;

e) Reforzar la cooperación internacional y regional para crear margen fiscal para el desarrollo social con el fin de permitir una mejor recuperación, y ampliar y redistribuir la liquidez de los países desarrollados a los países en desarrollo, entre otras cosas, mediante el aumento de la financiación en condiciones favorables y la canalización de los derechos especiales de giro no utilizados a todos los países que lo necesiten, incluidos los países de ingreso mediano, a través de la creación de un nuevo fondo fiduciario de resiliencia y sostenibilidad. Los Gobiernos y el sector privado deberían seguir apoyando la gestión y el alivio de la deuda mediante la reforma de la arquitectura de la deuda internacional en el marco de una arquitectura financiera internacional más sostenible y resiliente, para que la recuperación en curso sea más sólida y más inclusiva y resiliente, entre otras cosas, fomentando una mayor cooperación en materia de tributación internacional.